

**Enmiendas a la Totalidad****Iniciativa: 124 / 13**

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España (Orgánica).

Plazo de enmiendas: 01/09/2022 18:00

| <u>Fecha Presentación</u> | <u>Número</u> | <u>Tipo de Enmienda</u>       | <u>Autor</u>                               | <u>Observaciones</u> |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 28/06/2022 12:35          | 1             | Enm. total. texto alternativo | Grupo Parlamentario Ciudadanos             |                      |
| 28/06/2022 17:21          | 2             | Enm. total. texto alternativo | Grupo Parlamentario Popular en el Congreso |                      |
| 28/06/2022 17:40          | 3             | Enm. total. texto alternativo | Grupo Parlamentario VOX                    |                      |

## A LA MESA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA

### AUTOR

GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente **enmienda de totalidad de texto alternativo** a la iniciativa: Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España (Orgánica). (núm. expte. 124/000013)

Congreso de los Diputados, a 28 de junio de 2022.

### Firmado electrónicamente por

Edmundo Bal Francés, Portavoz adjunto Grupo Parlamentario Ciudadanos

Expediente: 124/000013

Nº Enmienda: 1

**AUTOR**

GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

**Texto que se propone**

**Artículo Único. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.**

**Uno. Se modifica el apartado tercero del artículo 490 del Código Penal, que queda redactado como sigue:**

1. El que allanare con violencia o intimidación la morada de cualquiera de las personas mencionadas en los artículos anteriores será castigado con la pena de prisión de tres a seis años. Si no hubiere violencia o intimidación la pena será de dos a cuatro años.
2. Con la pena de prisión de tres a seis años será castigado el que amenazare gravemente a cualquiera de las personas mencionadas en el apartado anterior, y con la pena de prisión de uno a tres años si la amenaza fuera leve.
3. El que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con **la pena de multa de doce a veinticuatro meses de prisión de seis meses a dos años** si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son

**Disposición derogatoria única**

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación i7jh2vkakjp3 en <http://app.congreso.es/comregtele/web/ficherosDeFirma.action?csv=i7jh2vkakjp3>

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo dispuesto en la misma.

#### **Disposición final primera.**

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

#### **Justificación**

I.

El Grupo parlamentario republicano ha presentado su Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar injurias a la Corona y los ultrajes a España.

El texto presentado tiene por objeto suprimir el apartado 3 del artículo 490 y los artículos 491 y 543. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente Ley Orgánica.

Es decir, con esta proposición se trata de despenalizar los delitos de calumnias o injurias al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas. La misma supresión se pretende para las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad.

En su exposición de motivos la Proposición de Ley justifica esta modificación en la importancia que según los propios proponentes tiene el derecho de libertad de expresión sobre cualquier derecho reconocido a las instituciones españolas.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación i7jh2vkakjp3 en <http://app.congreso.es/comregtele/web/ficherosDeFirma.action?csv=i7jh2vkakjp3>



## II.

Los delitos mencionados en la proposición sancionan penalmente una serie de hechos de gran importancia, en cuanto delitos comunes, y teniendo en cuenta la especial condición de los sujetos a los que se dirigen. Se incluyen como tales: el Rey o Reina, cualquiera de sus ascendientes o descendientes, la Reina consorte o el consorte de la Reina, el Regente o algún miembro de la Regencia y el Príncipe o Princesa de Asturias. Todos los demás miembros de la llamada Familia Real están excluidos de la especial protección que brinda el Código Penal.

En el caso de las Monarquías, y en concreto en el supuesto de la Monarquía Parlamentaria, la tutela se hace no sólo al titular máximo de la misma, sino a la institución llamada Corona. En efecto, la Corona se personifica en el Rey pero le trasciende en cuanto representa el conjunto de personas y prerrogativas a través de cuya institución se simboliza la Nación, la unidad de los órganos del Estado y su permanencia.

Por eso, al igual que se protege la Constitución y las Instituciones fundamentales del Estado, así como a la Administración Pública, la de Justicia e incluso, a las Instituciones de la Comunidad Internacional, por razones de lógica y coherencia jurídica se dispensa una especial protección a la Corona, en cuanto alberga la institución máxima de un Estado, cual es la Jefatura del Estado que, en un Estado con forma monárquica, es el Rey.

Estos son, los valores constitucionales que la Corona representa y no la persona en particular del rey o el resto de los sujetos contemplados en el título que figura en este Código Penal. Nos encontramos en una monarquía parlamentaria y la Corona sustenta estos valores institucionales, y ahí se incardinan estos derechos que ahora se pretenden derogar.

El bien jurídico protegido es la Corona, en cuanto a los valores institucionales que representa, que el artículo 56 de la Constitución, expresa del siguiente modo: "El Rey es el Jefe del estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del estado español".

Además, y junto a ello, como estamos ante "delitos pluriofensivos", se tutelan, igualmente, otros bienes jurídicos, referidos a las concretas personas protegidas: la vida, la integridad física y la salud, la libertad, el honor, la inviolabilidad domiciliaria y el derecho a la propia imagen.

## III.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación i7jh2vkakjp3 en <http://app.congreso.es/comregtele/web/ficherosDeFirma.action?csv=i7jh2vkakjp3>

En la iniciativa se propone derogar los artículos 490.3, 491 y 543 del Código Penal, todos ellos englobados en los delitos contra la Corona. La cuestión que plantea la iniciativa como único argumento es un pretendido alegato en favor de la libertad de expresión, que invocan como única causa de su iniciativa. Sin embargo, esto no es un argumento coherente por una sencilla razón, y es que su justificación no hunde sus raíces en la ponderación y el conflicto entre los derechos constitucionales de la libertad de expresión, de opinión y de información, por un lado, y el derecho al honor, incluso a la intimidad y la propia imagen, por otro.

No resiste esta propuesta, ni el más mínimo análisis jurídico, porque además la propuesta confunde y omiten deliberadamente que estos delitos que se pretenden derogar se incardinan dentro de los delitos contra la Constitución y que, por lo tanto, en ellos el bien jurídico protegido es la Corona en los términos que establece el artículo 53 del texto constitucional, es decir, como símbolo de unidad y permanencia del Estado, como símbolo de unidad y permanencia de España, que arbitra y modera el reglamento y funcionamiento de las instituciones. Ante esta posición la Corona representa justo la imagen contraria a la que los proponentes pretenden hacer ver en esta iniciativa, sus valores son la concordia y la representación de la unión de esta nación.

La calumnia y la injuria tienen un elemento fundamental, la mentira. La verdad nos hace libres, y es lo que quieren cargarse; quieren cargarse la verdad para cargarse la libertad. Si se desarma el nacionalismo de las mentiras, se le ven las costuras, por eso quieren legalizar la injuria, la calumnia y los insultos a la Corona y, por ende, a los signos constitucionales y a España. Pero la libertad de uno acaba cuando empieza la del otro, y en España la inmensa mayoría de la población cree en la Constitución; cree en la monarquía parlamentaria; cree en las instituciones; cree en nuestros símbolos, como la bandera o el himno nacional, y creemos en los símbolos que representan a nuestras comunidades autónomas, y cuando alguien ataca estos símbolos o los pilares de nuestro país, hay millones de personas que nos sentimos molestas, ofendidas e indignadas.

El Estado no puede permanecer impasible ante los ataques que se amparan malintencionadamente en la libertad de expresión. Nunca, la libertad de expresión puede ser libre para incitar al odio y provocar el enfrentamiento. Este es el límite que pone el Tribunal Constitucional, porque la libertad de expresión en ningún caso puede ser absoluta e ilimitada, más habida que cuenta de que el único efecto que tendría la aceptación de las injurias y calumnias como una forma ordinaria más de expresión personal, es la incitación a una desconfianza total hacia las instituciones.

#### IV.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación i7jh2vkakjp3 en <http://app.congreso.es/comregtele/web/ficherosDeFirma.action?csv=i7jh2vkakjp3>



Por otro lado, llama poderosamente la atención que el referente legislativo en esta cuestión para el independentismo sea Estados Unidos, sin embargo, el texto del expositivo no hace referencia a los ejemplos existentes en el ámbito del derecho comparado más cercano: Francia, mantiene el delito especial de injurias al jefe del Estado, el presidente de la República, equiparado a las injurias a diputados y a ministros. La República italiana también mantienen cuatro delitos de vilipendio político: al presidente de la República, a la nación italiana, a la bandera italiana y a la República misma, declarados constitucionales por la Corte Constitucional italiana.

En esta línea en favor de la protección de la institución, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en múltiples ocasiones a lo largo de su jurisprudencia (por ejemplo, en la STC 6/1981 de 16 de marzo, o la STC 41/2001 de 11 de abril), en las que ha proclamado la gran importancia de la libertad de expresión, como base de las sociedades democráticas y los Estados de Derecho, pues asegura la formación de una opinión pública libre y la defensa del pluralismo, valor superior de todo sistema democrático. En efecto, el Estado democrático es, por definición, un sistema plural que tolera la existencia de diferentes posiciones o ideas, necesarias para el libre desarrollo del individuo y para el propio sistema en su conjunto.

Es por esto que el margen que se le debe conceder a tal derecho, reconocido en nuestra Constitución como fundamental en el art. 20.16, debe ser lo más amplio y permisivo posible, amparándose en el marco de la libre de expresión tanto las manifestaciones inofensivas, como las críticas que puedan herir, molestar o perturbar al receptor. Sin embargo, una vez reconocida la importancia indiscutible de tal derecho, el Tribunal Constitucional sostiene que no es un derecho absoluto, sino que puede verse sometido a límites justificados. Así, por ejemplo, no resulta amparable en ningún caso ni el insulto ni la utilización de expresiones innecesarias para manifestar una opinión que sean especialmente vejatorias o injuriosas, o que alteren el orden público, así como la seguridad nacional. Además, y de forma indudable, quedan también fuera del campo de la libertad de expresión aquellas manifestaciones que promuevan o inciten al odio o a la violencia.

## V.

Críticar a la Corona, incluso haciéndolo de modo hostil, es una conducta enmarcada en la libertad de expresión. Pero dicha crítica no puede afectar a la reputación del Rey como persona. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Otegi, afirma que la crítica política del Rey está amparada en la libertad de expresión, siempre que se efectúe dentro de los límites del

respeto de su reputación personal, que debe ser protegida contra ataques que tengan por objeto menospreciarlo, cayendo en un discurso del odio, que el Tribunal define como toda expresión que promueve o justifica cualquier modalidad de odio, basada en la intolerancia.

Las personas que intervienen en el debate público deben respetar la dignidad y la reputación de los demás. La Constitución no reconoce el derecho al insulto. Por eso, las expresiones indudablemente injuriosas, no necesarias para exponer las propias opiniones, no pueden considerarse legítimas (STC 107/1988). Ahora bien, cuando quien realiza la crítica del Rey es un ciudadano elegido por el pueblo para el cargo que ocupa, la libertad de expresión alcanza un margen más amplio, porque dicho ciudadano representa a sus electores y defiende sus intereses, siendo asumible cierta falta de moderación, inaceptable en el caso de otro ciudadano. Sin embargo, serán el Fiscal y los tribunales deben apreciar, en cada ocasión y dentro de su respectivo ámbito de competencias, la legitimidad de dicha opinión acerca de estas instituciones, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes.

Es por ello que la legislación vigente, eliminadas las penas privativas de libertad y manteniendo únicamente las penas pecuniarias, permitiría alcanzar una adecuada respuesta penal en cada caso, siendo indudable que la supresión de la actual protección de la Corona no tiene fundamento, pues la actual normativa faculta a la Justicia para aplicar y consolidar la mejor doctrina.

## VI.

La presente Proposición de Ley, pues, no solo supone un frontal cuestionamiento de nuestra Constitución y de las instituciones que representan la unidad de todos los españoles, sino que supone además hacer planear la duda sobre las salvaguardas establecidas en nuestro Código Penal, justificándose en un discurso falaz sobre la libertad de expresión. Nuestra propuesta pretende una mejora de dichas protecciones a través del ajuste de las penas para que se ajusten al principio de proporcionalidad, como ya lo hacen las relativas a los delitos de injurias contra los órganos constitucionales y contra las Fuerzas Armadas recogidos en el artículo 504 del Código Penal.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta esta enmienda a la totalidad con texto alternativo a la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona.



## A LA MESA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA

### AUTOR

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente **enmienda de totalidad de texto alternativo** a la iniciativa: Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España (Orgánica). (núm. expte. 124/000013)

Congreso de los Diputados, a 28 de junio de 2022.

### Firmado electrónicamente por

Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Expediente: 124/000013

Nº Enmienda: 2

## AUTOR

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

## Texto que se propone

### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Todas las democracias se han dotado a sí mismas de la capacidad de proteger bienes jurídicos mediante la legislación penal. El Preámbulo del Código Penal de 1995 comienza así: *“Si se ha llegado a definir el ordenamiento jurídico como conjunto de normas que regulan el uso de la fuerza, puede entenderse fácilmente la importancia del Código Penal en cualquier sociedad civilizada”*. Esta herramienta fundamental para el ejercicio del ius puniendi recoge en su Libro II Título XXI los “delitos contra la Constitución”. Y entre ellos se contienen las injurias y calumnias contra el Rey o la Reina, Príncipe o Princesa de Asturias, sus consortes, los Regentes, y otros familiares (Art. 490.3 y 491 CP); así como los ultrajes a España (Art. 543).

En lo que se refiere a este último delito -los ultrajes a España- la Sentencia del Tribunal Constitucional 94/1985, de 29 de julio, declaró en su Fundamento Jurídico 7º lo siguiente en referencia al delito similar que existía en el anterior Código Penal: *“No puede desconocerse que la materia sensible del símbolo político [...] trasciende a sí misma para adquirir una relevante función significativa. Enriquecido con el transcurso del tiempo, el símbolo político acumula toda la carga histórica de una comunidad, todo un conjunto de significaciones que ejercen una función integradora y promueven una respuesta socioemocional, contribuyendo a la formación y mantenimiento de la conciencia comunitaria, y, en cuanto expresión externa de la peculiaridad de esa comunidad, adquiere una cierta autonomía respecto de las significaciones simbolizadas, con las que es identificada; de aquí la protección dispensada a los símbolos políticos por los ordenamientos jurídicos. Al símbolo político corresponde, pues, al lado de una función significativa integradora, una esencial función representativa e identificadora, que debe ejercer con la mayor pureza y virtualidad posibles”*.

No es el Código Penal español ni el Tribunal Constitucional una excepción en el ámbito europeo a la hora de proteger los símbolos de los ultrajes que puedan sufrir pues *“esta figura penal aparece tipificada, también, en códigos penales de otros Estados miembros de la Unión Europea, con semejantes o incluso con penas más agravadas que la prevista en el precepto español [Código penal alemán, arts. 90 a) y 104; Código penal francés (art. 433.5.1), o Código penal italiano (arts. 291 y 292)], por la relevancia del bien jurídico protegido”* (STS 1175/2022, de 29 de marzo).

Por su parte, y en lo que se refiere al delito de injurias y calumnias al Rey (art. 90.3 CP) la Sentencia del Tribunal Supremo 1298/2020, de 7 de mayo, dice que:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación um063nx3jhhk en <http://app.congreso.es/comregtele/web/ficherosDeFirma.action?csv=um063nx3jhhk>



*“En modo alguno puede admitirse que formar parte de la monarquía suponga una servidumbre de carga que obliga a aceptar la emisión pública de injurias y calumnias vertidas con publicidad con un amplio público (...).*

*En ningún modo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de marzo de 2018 valida y admite que exista esa servidumbre, sino que marca claramente las directrices en orden a la posibilidad de que cualquier persona se le pueda cuestionar o criticar su posición en la vida social y pública. Pero no es el caso que se establece en esta cuestión, sino que se va más allá de la mera crítica pública respecto a la pertenencia a la monarquía y esto es lo que es delictivo y típico en el artículo 490 del Código Penal.*

*Tampoco puede admitirse, ni se deriva de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de Marzo de 2018, que pertenecer a la monarquía suponga una minusvaloración de los derechos que se tengan a la protección del honor. No se trata de que exista una barrera que no admita crítica la pertenencia a la monarquía, pero sí, al menos, el establecimiento de un plano de igualdad en el sentido de que si un miembro de la monarquía es víctima de injuria o calumnia puede merecer esta conducta el reproche penal que marca el tipo penal del artículo 490”.*

En cualquier caso, ambos delitos tienen en común que quienes los cometen pretenden con frecuencia que su conducta queda amparada por el derecho constitucional a la libertad de expresión.

En el Preámbulo de la Constitución de 1978 se declara la voluntad de la Nación española de “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes”; por tal razón, el artículo 1.1 considera como valores superiores del ordenamiento jurídico “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, de modo que en España se ha de asegurar que puedan convivir en libertad e igualdad personas que tengan opiniones políticas y convicciones ideológicas muy diferentes, siempre que se respeten los derechos y libertades de los demás y se desarrollen dentro del marco constitucional y legalmente establecido.

En su artículo 20, la Constitución reconoce los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad de información, que define como el derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” ; “a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”; “a la libertad de cátedra” y el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

De igual forma, en su apartado 4, ese artículo 20 añade: “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

Por lo tanto, la libertad de expresión, al igual que el resto de los derechos, no es absoluta, sus límites se encuentran en los demás derechos que garantiza la Constitución.



La estructura del precepto informa de lo que, a efectos interpretativos, la jurisprudencia constitucional ha asentado en numerosas sentencias: “no existen derechos ilimitados”. Y por ello, la doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido límites al derecho a la libertad de expresión, límites necesarios e imprescindibles que deben ser respetados por todos y que si se traspasan merecen el correspondiente reproche, incluido el penal.

El máximo intérprete de la Constitución define la libertad de expresión como “la libre manifestación de creencias, juicios o valoraciones subjetivas, esto es, como libre difusión de ideas u opiniones”, esto es, la libertad de expresión conlleva un matiz subjetivo. Estas ideas las podemos compartir, aunque sean contrarias a las del resto, pero precisamente para evitar que la expresión libre de las ideas puedan afectar o vulnerar derechos de otros, el Tribunal Constitucional introduce la necesaria aplicación de la ponderación ante los derechos en colisión. La ponderación exigirá valorar caso por caso, considerando junto con la relevancia subjetiva y objetiva de lo expresado, la afectación de los derechos en colisión para determinar si el ejercicio de la libertad de expresión es o no legítimo. Y si no lo es, la ley punitiva determinará las consecuencias de tal vulneración, correspondiendo a los jueces y tribunales, incluyendo al propio Tribunal Constitucional, por la vía del recurso de amparo, apreciar y ponderar si ha habido o no transgresión de otros derechos en el ejercicio de la libertad de expresión.

En la práctica, el ejercicio de la libertad de expresión entra en colisión con frecuencia con los derechos al honor, a la intimidad y la propia imagen, límites expresamente reconocidos en el precepto constitucional. De igual forma, al amparo de la misma, suelen vulnerarse la libertad ideológica, religiosa y de culto, algunos de los derechos más íntimamente vinculados al libre desarrollo de la personalidad, garantizados en el artículo 16 de la Constitución.

Por eso, cuando se produce un conflicto entre derechos deberá llevarse a cabo la correspondiente ponderación de bienes, teniendo que analizar cada una de las circunstancias concurrentes, de forma tal que cada caso necesitará de un examen particularizado sin que quepa la aplicación automática de reglas generales.

La jurisprudencia constitucional ha ido desgranando criterios a los que atenerse cuando se produzca colisión de derechos con la libertad de expresión.

En conclusión, en España la libertad de expresión está suficientemente garantizada, y por eso nuestro país aparece año tras año en todas las clasificaciones internacionales de sistemas democráticos más avanzados y con los más altos estándares.

El Código Penal de 1995 dedica en su brevísima exposición de motivos un párrafo a la ponderación de derechos cuando dice que “se ha dado especial relieve a la tutela de los derechos fundamentales y se ha procurado diseñar con especial medida el recurso al instrumento punitivo allí donde está en juego el ejercicio de cualquiera de ellos: sirva de ejemplo, de una parte, la tutela específica de la integridad moral y, de otra, la nueva regulación de los delitos contra el honor. (...) Al configurar los delitos contra el honor del modo en que se propone, se otorga a la libertad de expresión toda la

relevancia que puede y debe reconocerle un régimen democrático”.

Los artículos 490.3 y 491 - las calumnias e injurias al Rey y otros miembros de su Familia y de la Regencia, y la indebida utilización de la imagen- dentro de los Delitos contra la Corona mantienen prácticamente la redacción original dada en 1995.

El artículo 543 - ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas- no han sufrido modificación alguna desde la promulgación del Código Penal.

En definitiva, y tal y como se expresa en la referida Exposición de Motivos del Código Penal, el legislador de 1995 ya hizo una ponderación de derechos fundamentales cuando tipificó los delitos contenidos en los preceptos mencionados: una ponderación que mantiene absoluta vigencia hoy en día que hace innecesaria la reforma de esos delitos, y mucho menos su supresión.

Por todo ello, se presenta el siguiente texto alternativo:

**«Artículo único.** Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

**Uno.** El apartado 3 del artículo 490 tendrá la siguiente redacción:

*“3. El que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son”.*

**Dos.** El artículo 491 tendrá la siguiente redacción:

**“Artículo 491.**

*1. Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses.*

*2. Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de la Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o de la Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona”.*

**Tres.** El artículo 543 tendrá la siguiente redacción:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación um063nx3jhhk en <http://app.congreso.es/comregtele/web/ficherosDeFirma.action?csv=um063nx3jhhk>



**“Artículo 543.**

*Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses”.*

**Disposición derogatoria única.**

*Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en esta Ley Orgánica.*

**Disposición final primera. Título competencial.**

*Esta ley se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva en materia de legislación penal que atribuye al Estado el artículo 149.1.6.ª de la Constitución.*

**Disposición final segunda. Entrada en vigor.**

*La presente ley orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado».*





**ENMIENDA A LA TOTALIDAD CON TEXTO ALTERNATIVO**

**A LA COMISIÓN DE JUSTICIA**

**EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX (GPVOX)**, al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente **ENMIENDA A LA TOTALIDAD CON TEXTO ALTERNATIVO**, que se acompaña, a la **Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España (Orgánica)** ("BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 255-1, de 10 de junio de 2022. Número de Expediente 124/000013).

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 28 de junio de 2022

D. José María Figaredo Álvarez-Sala.

Portavoz sustituto G.P. VOX.



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA



GRUPO PARLAMENTARIO

## **PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA AUMENTAR LAS PENAS POR INJURIAS A LA CORONA Y LOS ULTRAJES A ESPAÑA.**

### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

#### **I**

El derecho fundamental a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20.1 a) de la Constitución Española ("CE") permite *"expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción"*. De acuerdo con la *Sentencia del Tribunal Constitucional 12/1982, de 31 de marzo (FJ 3)*, *"se trata ante todo de un derecho de libertad, por lo que básicamente significa ausencia de interferencias o de intromisiones de las autoridades estatales en el proceso de comunicación. Sin embargo, en otro plano significa el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático. El art. 20 defiende la libertad en la formación y en el desarrollo de la opinión pública, pues la libertad en la expresión de las ideas y los pensamientos y en la difusión de noticias es necesaria premisa de la opinión pública libre"*.

Así, de acuerdo con la interpretación que de este precepto realiza el Tribunal Constitucional, *"como intérprete supremo de la Constitución"* (artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional), el derecho a la



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA



GRUPO PARLAMENTARIO

libertad de expresión comprende no solo la difusión de ideas u opiniones “acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes”, sino también aquellas “que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población” (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4). En este sentido, la STC 105/1990 establece lo siguiente:

“«En efecto, desde la STC 104/1986, de 17 de julio, hemos establecido que, si bien **“el derecho a expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos [art. 20.1.a) CE] dispone de un campo de acción que viene solo delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para su exposición** (SSTC 105/1990, de 6 de junio, FJ 4, y 112/2000, de 5 de mayo, FJ 6), no es menos cierto que también hemos mantenido inequívocamente que **la Constitución no reconoce en modo alguno** (ni en ese ni en ningún otro precepto) **un pretendido derecho al insulto**. La Constitución no veda, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones hirientes, molestas o desabridas, pero **de la protección constitucional que otorga el art. 20.1 a) CE están excluidas las expresiones absolutamente vejatorias**; es decir, aquellas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate» (SSTC 232/2002, FJ 3; 226/2016 FJ 5)”.

En definitiva, el derecho a la libertad de expresión también comprende la libertad de crítica, “aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática” (SSTC 174/2006, de 5 de junio, FJ 4, y 77/2009, de 23 de marzo, FJ 4).





CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA



GRUPO PARLAMENTARIO

Por ello, una de las circunstancias fundamentales que han de tenerse en cuenta para fijar el grado de protección constitucional de un determinado mensaje será *“el carácter de personaje público del sujeto sobre el que se emite la crítica u opinión (STC 76/1995, de 22 de mayo), y especialmente si son titulares de cargos públicos, cualquiera que fuere la institución a la cual sirvan, ya que, como consecuencia de la función que cumplen las libertades de expresión y de información en un sistema democrático, sus titulares han de soportar las críticas o las revelaciones aunque “duelan, choquen o inquieten” (STC 76/1995) o sean especialmente molestas o hirientes (STC 192/1999, de 25 de octubre)”*.

Con base en lo anterior, los miembros de la Corona, los cargos de instituciones del Estado o los representantes políticos pueden ser, a juicio del Tribunal Constitucional, objeto de estas opiniones y críticas y, de hecho, son destinatarios recurrentes de la práctica del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en nuestro país. Cualquier español puede ejercer libremente una crítica cuya protección es mayor, si cabe, cuando el objeto de la misma son personas con mayor proyección pública con motivo del cargo que representa.

## II

La práctica totalidad de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto de la libertad de expresión han versado sobre supuestos en los que este derecho fundamental se encontraba en colisión con otros derechos o bienes jurídicos protegidos constitucionalmente. Por ello, ha de considerarse que la libertad de expresión ha sido *“definida por sus límites”* (VILLAVERDE MENÉNDEZ).



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA



GRUPO PARLAMENTARIO

En este sentido, el intérprete de la CE ha venido identificando los límites a la libertad de expresión con referencia, entre otros, al artículo 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), a cuyo tenor *“toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa”*. De acuerdo con lo expuesto, el ejercicio de la libertad de expresión está sometido a *“ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral [...]”* (entre otras, STC 192/2020, FJ 4).

De la misma manera, la STC 177/2015, de 22 de julio, trae a colación la STC 136/1999, de 20 de julio, para razonar que *“«no cabe considerar ejercicio legítimo de las libertades de expresión e información a los mensajes que incorporen amenazas o intimidaciones a los ciudadanos o a los electores, ya que como es evidente con ellos ni se respeta la libertad de los demás, ni se contribuye a la formación de una opinión pública que merezca el calificativo de libre»* (FJ 15). (...) [L]a utilización de símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con la exclusión política, social o cultural, deja de ser una simple manifestación ideológica para convertirse en un acto cooperador con la intolerancia excluyente, por lo que no puede encontrar cobertura en la libertad de expresión, cuya finalidad es contribuir a la formación de una opinión pública libre”

El establecimiento de estos límites también viene amparado por la reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, v. gr., la STEDH



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA



GRUPO PARLAMENTARIO

de 16 de julio de 2009 (núm. 15615/07, Caso Féret vs Bélgica, p. 64) afirma que *«la tolerancia y el respeto a la igual dignidad de todos los seres humanos son la base de una sociedad democrática y pluralista. De ello se deduce que, en principio, puede considerarse necesario en las sociedades democráticas sancionar o incluso impedir toda forma de expresión que propague, fomente, promueva o justifique el odio basado en la intolerancia, garantizar que las "formalidades", "condiciones", "restricciones" o "sanciones" que se impongan sean proporcionadas a la finalidad legítima que se persigue»*.

### III

Siendo así, existen determinados bienes jurídicos protegidos constitucionalmente que, colisionando con la libertad de expresión, justifican la legítima limitación de esta. Desde este punto de vista, la Corona y la Nación, en tanto que elementos fundantes de la configuración de España como monarquía parlamentaria y como Estado democrático de Derecho, son bienes jurídicos de la máxima importancia y con el más alto refuerzo constitucional, por lo que deben tener un plus de protección equiparable a su dignidad y categoría.

Así, por un lado, con arreglo al artículo 56 CE, *“[e]l Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”*. La Corona, como institución del Estado, se configura así, ex Título II CE, como consustancial a la forma política del Estado: la Monarquía parlamentaria.





CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA



GRUPO PARLAMENTARIO

Como se anticipó *supra*, la Corona no está excluida de la crítica ejercida en la esfera de la libertad de expresión. Antes al contrario, en tanto que Jefatura del Estado y “símbolo de su unidad y permanencia”, su protección frente a ataques injustificados o vejatorios debe ser máxima. En este sentido, es necesario prevenir los ataques provenientes de conductas que traspasen los límites del derecho a la libertad de expresión y transgredan otros merecedores de protección penal por su relevancia constitucional.

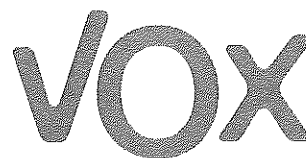
Así, en la *STC 177/2015, de 22 de julio*, el Tribunal Constitucional valora la ponderación entre la libertad de expresión y un posible delito de injurias contra la Corona. En particular, y partiendo de que *“las expresiones indudablemente injuriosas o sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas”* no quedan amparadas por la Constitución, se afirma que es necesario *“sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia”*, por cuanto de esta manera lo expresado, aun de forma simbólica, *“solamente trasluce ultraje o vejación”* y tiene un significado *“intrínsecamente injurioso”*. La prevención de este tipo de ataques es, precisamente, el motivo por el cual se ha tipificado el delito de injurias a la Corona en el artículo 490.3 del Código Penal, precisamente en sede de delitos contra la Constitución (Título XXI) y no de delitos contra el honor (Título XI)

En este punto, la STC referida, en relación con la quema de imágenes de miembros de la Corona, señala que *“el hecho de quemar, en las circunstancias descritas, una fotografía de SS.MM. los Reyes es una conducta penalmente no reprochable por constituir un legítimo ejercicio de la libertad de expresión que garantiza la Constitución [art. 20.1 a) CE] o si, por el contrario, como declararon las Sentencias*



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA



GRUPO PARLAMENTARIO

*judiciales ahora recurridas y, a su vez, ha opinado también en el presente proceso constitucional el Ministerio Fiscal, dicha conducta tiene un contenido intrínsecamente injurioso y vejatorio que desborda los límites constitucionales de la libertad de expresión”.*

*Para ello, concluye que “es obvio que las manifestaciones más toscas del denominado «discurso del odio» son las que se proyectan sobre las condiciones étnicas, religiosas, culturales o sexuales de las personas. Pero lo cierto es que el discurso fóbico ofrece también otras vertientes, siendo una de ellas, indudablemente, la que persigue fomentar el rechazo y la exclusión de la vida política, y aun la eliminación física, de quienes no compartan el ideario de los intolerantes”. En consecuencia, considera que “quemar públicamente el retrato de los Monarcas es un acto no sólo ofensivo sino también incitador al odio, en la medida en que la cremación de su imagen física expresa, de un modo difícilmente superable, que son merecedores de exclusión y odio”*

Asimismo, en la actualidad la Corona es objeto de numerosos ataques que exceden con mucho la libertad de expresión, y que buscan la destrucción de la institución que, como se refirió, es “símbolo de la unidad y permanencia del Estado”. Con el fin de salvaguardar lo que la Corona y su titular representan, y para coadyuvar a una convivencia pacífica, se propone no la derogación del delito de injurias a la Corona, sino, al contrario, el endurecimiento de la pena asociada a la comisión de esta conducta.

#### IV

En cuanto a la Nación, no puede olvidarse que los símbolos institucionales —la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional— representan a nuestra Patria, nos recuerdan nuestra historia común y son testimonio de la unidad de la Nación



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA



GRUPO PARLAMENTARIO

española, nos diferencian del resto de países del mundo y nos aglutinan en torno a un proyecto de todos. Se trata, por tanto, de elementos esenciales a la configuración identitaria de España.

Sin embargo, en los últimos años con especial crudeza se viene produciendo un incremento de la cantidad y calidad de los ataques a los símbolos comunes de nuestra Nación, en lo que se trata de ataques y ultrajes no solo a España y a sus símbolos, sino también a todos los españoles.

Desgraciadamente, también hay que lamentar que en muchas ocasiones dichos ataques son impulsados desde instituciones públicas y, en particular, desde gobiernos regionales. Se omite así el deber de respeto y lealtad a la Nación y a sus símbolos y, en definitiva, la obligación de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho que consagra el artículo 103 CE.

Al respecto, la STC 190/2020, de 15 de diciembre, ha señalado lo siguiente:

*“[Se] concede un amplio margen al ejercicio de la libertad de expresión, permitiendo incluso la puesta en escena de actitudes provocadoras, que se utilizan para llamar la atención de la opinión pública y transmitir un mensaje crítico (...). No se trataba, por tanto, de una crítica hacia personas que, por su función, están sometidas a un especial escrutinio ciudadano (...), sino de unas expresiones objetivamente ofensivas hacia un símbolo, la enseña nacional, en un marco reivindicativo completamente ajeno a los valores que la bandera representa.*

*(...) Cuando, como ocurre en el caso de autos, la expresión de una idea u opinión se hace innecesaria para los fines que legítimamente puedan perseguirse, en este caso la reivindicación laboral; cuando aparece de improviso y no tiene que ver, por su desconexión, con el contexto en que se manifiesta; cuando, además, por los términos*



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA



GRUPO PARLAMENTARIO

*empleados, se proyecta un reflejo emocional de hostilidad; cuando, en definitiva, denota el menosprecio hacia un símbolo respetado y sentido como propio de su identidad nacional por muchos ciudadanos, el mensaje cuestionado queda fuera del ejercicio regular del derecho a la libertad de expresión”.*

Por lo expuesto, a la vista de los ataques crecientes, constantes y reiterados contra los símbolos nacionales, es necesario también mejorar su régimen de protección y aplicarlo con mayor rigor y fuerza, incrementando la respuesta penológica por la comisión del delito de ofensas o ultrajes a España.

## V

En definitiva, la libertad de expresión no puede ser una coartada que encubra el único propósito de proporcionar un escenario de obscena impunidad para la avalancha de insultos, ultrajes y escarnios de toda clase que muchos preparan contra el más precioso y sagrado símbolo de la Patria, que es la Bandera Nacional, y contra la institución que es la encarnación misma de la unidad y permanencia de la Nación, que es la Corona.

La Ley no puede proporcionar cobertura legal a una lluvia torrencial de agresiones contra la Bandera, el Himno y la Corona, que se perpetrarán en nombre de la hispanofobia más desvergonzada, con el impulso del odio más encarnizado. Antes al contrario, la defensa de libertad de expresión exige acabar con las verdaderas amenazas a esta libertad en las sociedades occidentales: la corrección política y la llamada cultura de la cancelación.





CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA



GRUPO PARLAMENTARIO

Es positivo, y fundamental en democracia, debatir en libertad sobre formas de Estado y de gobierno, y que esa discusión está amparada por el derecho a la libertad de expresión. Pero igual que los derechos fundamentales tienen un contenido esencial, también tienen límites, como el respeto a las personas y a las instituciones básicas de la comunidad de la que todos los españoles forman parte, así como la lealtad a la Nación y al proyecto de común que engloba a todos.

En definitiva, por todo lo hasta aquí expuesto, el incremento de las penas por los delitos de injurias a la Corona y ultrajes a España no solo es necesaria, sino que, además, supondrá un mayor respeto y afirmación, en el ámbito que es *ultima ratio* del Derecho, de los elementos simbólicos vertebradores del Estado de Derecho.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario VOX presenta esta ENMIENDA A LA TOTALIDAD, en la que se propone como texto alternativo la modificación de los artículos 490.3, 491 y 543 del Código Penal.

En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX formula el siguiente

### TEXTO ARTICULADO

**Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.**



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA



GRUPO PARLAMENTARIO

Primero. Se modifica el apartado 3 del artículo 490 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:

*«(...) 3. El que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de ~~seis meses a dos años~~ **uno a tres** años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de ~~seis a doce~~ **doce a veinticuatro** meses si no lo son.»*

Segundo. Se modifica el artículo 491 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:

*«Artículo 491.*

*1. Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de ~~cuatro a veinte~~ **de seis a veinticuatro** meses.*

*2. Se impondrá la pena de multa de ~~seis a veinticuatro~~ **doce a treinta** meses al que utilizare la imagen del Rey o de la Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o de la Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona.»*



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA



GRUPO PARLAMENTARIO

Tercero. Se modifica el artículo 543 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:

«Artículo 543.

*Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de ~~siete a doce~~ **doce a veinticuatro** meses».*

#### **Disposición final. Entrada en vigor.**

La presente Ley Orgánica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

#### **ANTECEDENTES NORMATIVOS**

- *Constitución Española.*
- *Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.*